



**JUZGADO DÉCIMO (10º) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Ref. Proceso	11001-33-35-010-2022-00365-00
Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	SANTIAGO LONDOÑO NOREÑA
Demandado	NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA – ARMADA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la **solicitud de medida cautelar** presentada por la parte accionante.

I. ANTECEDENTES

1. El demandante **SANTIAGO LONDOÑO NOREÑA** a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló demanda en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA – ARMADA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD**, tendiente a obtener la nulidad del Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML22-1-736 MDNSG-TML-41.1 del 9 de septiembre de 2022, la cual ratificó en su integridad el Acta de Junta Médico Laboral No. 022 del 15 de febrero de 2022, registrada en la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional.

2. Argumenta el demandante, en síntesis, que su situación médico laboral amenaza su permanencia en la Armada Nacional, toda vez que su situación se enmarca en el numeral 2 del literal a del artículo 8 del Decreto 1793 de 2000, es decir, que es cuestión de tiempo antes de que sea retirado de la Armada Nacional por disminución de su capacidad psicofísica, lo cual atentaría contra la estabilidad laboral reforzada de la cual es titular y reflejaría la negligencia de la Armada Nacional, en la medida que omitieron su deber de reeducar al infante de marina profesional en procura de garantizarle un trabajo en condiciones dignas que se acompase con su estado de salud, competencias profesionales y habilidades, es decir, reubicarlo laboralmente y reasignarle funciones.

3. Dentro del escrito de demanda, la parte actora establece en escrito aparte **“SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR** de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo demandado.

4. Sustenta su solicitud en el estado de salud del demandante y la debilidad manifiesta que traería consigo su desvinculación de la armada Nacional, generando un grave estado de indefensión y vulnerabilidad al privarlo de su sustento económico que es su salario.

II. TRÁMITE IMPARTIDO

5. A través de providencia de **27 de octubre de 2022**, el Juzgado admitió la demanda formulada por **SANTIAGO LONDOÑO NOREÑA** y ordenó la notificación de la demandada **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA – ARMADA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD** y en providencia de la misma data, se ordenó correr traslado de la medida cautelar a la parte pasiva.

6. Dentro del trámite de traslado de la medida cautelar, el apoderado de la demandada se pronunció sobre la solicitud de suspensión provisional.

7. En primer lugar, argumenta que la parte demandante no allegó prueba de la violación de las normas superiores que invoca como infringidas, tampoco demostró que los actos administrativos demandados estén generando perjuicios para el señor **SANTIAGO LONDOÑO NOREÑA**, pues la simple manifestación no resulta suficiente para tener por acreditado el perjuicio irremediable en razón a que debe acreditarse, al menos sumariamente, la existencia de estos.

8. Consecuente a lo anterior, la solicitud de medida cautelar no cumple con la carga argumentativa suficiente para acreditar el concepto de violación normativo de los actos demandados, ni se expresan las razones por las cuales no proceder a la suspensión provisional pone en riesgo el objeto de la presente demanda, siendo este un requisito establecido por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

9. Para efectos de resolver la solicitud de medida cautelar elevada por la entidad demandante, sea lo primero recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo **229 de la Ley 1437 de 2011**, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, el Juez o Magistrado Ponente, a petición de parte podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

10. Por su parte, el artículo **230** de la misma ley establece que las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, por lo tanto, se podrán decretar cualquiera de las medidas allí señaladas, entre las cuales, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

11. Además, el artículo **231** Ibidem establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento de un derecho y la indemnización de perjuicios, se deberá probar al menos sumariamente la existencia de los mismos.

12. Descendiendo al caso concreto, se observa que la parte demandante pretende la nulidad del Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML22-1-736 MDNSG-TML-41.1 del 9 de septiembre de 2022, la cual ratificó en su integridad el Acta de Junta Médico Laboral No. 022 del 15 de febrero de 2022 con miras a obtener, a título de restablecimiento del derecho, la reubicación laboral y reasignación de funciones en labores acordes con sus competencias y estado de salud, en las cuales no se desmejoren sus derechos y garantías laborales y constitucionales.

13. El Juzgado estima que la suspensión provisional debe ser denegada por las siguientes razones:

13.1. En la solicitud de la medida cautelar, la parte actora sostiene que la administración omitió su deber de reeducar al demandante en su condición de infante de marina en procura de garantizarle un trabajo en condiciones dignas que se acompasen con su estado de salud, competencias profesionales y habilidades, es decir, reubicarlo laboralmente y reasignarle funciones. En el escrito de medida cautelar se expresó que el actor tiene la voluntad de continuar prestando sus servicios a la Armada como tecnólogo en logística, manejo de herramientas ofimáticas como Excel, entre otras.

13.2. El Juzgado constata que, en situaciones similares a la presente, la Corte Constitucional ha precisado en reiteradas oportunidades que las personas valoradas con pérdida de la capacidad laboral y no aptas para la vida militar, constituyen sujetos de especial protección constitucional que tienen derecho a ser reubicados en una actividad acorde con sus capacidades y formación, a efecto de materializar el principio de integración laboral que debe guiar la actuación del Estado¹.

Esta garantía, en palabras de la Corte, implica que no basta que las autoridades médico-laborales determinen que una persona no es apta para la vida militar, **sino que deben analizar la posibilidad de reubicarla atendiendo a sus habilidades, experticias, formación y aptitudes**. Si se omite tal análisis, la Corte Constitucional ha precisado que constituye “*en un acto que contraría los artículos 13 y 46 de la Constitución y la Ley 361 de 1996, normas en virtud de las cuales, le corresponde al Estado-empleador adoptar medidas de integración para el trabajador en condición de discapacidad, ofreciéndole alguna alternativa de reubicación*”².

En armonía con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado también ha garantizado la protección del soldado profesional que sufre de un trastorno grave de salud que se concreta en el derecho a ser reubicado para que cumpla otras funciones de conformidad con sus habilidades y destrezas. En un caso en el que analizó el retiro de un soldado profesional **sin que se estudiara previamente la posibilidad de una reubicación laboral**, el alto tribunal se refirió a esta garantía constitucional que, entre otras, tiene consagración legal en la Fuerza Pública en el artículo 15.2 del Decreto ley 1796 de 2000, que le asigna a la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía la función de para la función de “*clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite*”.

El alto tribunal precisó sobre la garantía y sobre la función de la Junta Médico-Laboral, lo siguiente:

*“Así las cosas, como el artículo 10 del Decreto Ley 1793 de 2000 dispone que « El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, **podrá ser retirado del servicio**», para la Sala, la administración debe ejercer esta facultad en armonía con el derecho a la estabilidad reforzada desarrollado por la jurisprudencia, de modo que la aplicación del retiro debe ser restringida para aquellos casos en los cuales definitivamente no proceda la reubicación laboral.*

*En el sub judice la Junta Médica Laboral calificó la disminución del 14% de la capacidad laboral del actor e indicó que no era apto para la actividad militar, decisión que fue confirmada por el Tribunal Médico Laboral de la entidad accionada. Sin embargo, **la Junta no estudió si el demandante podría ser***

¹ Ver entre otras, la sentencia T-372 de 2018 (MP. José Fernando Reyes Cuartas)

² Ibidem.

reubicado dentro del Ejército con funciones diferente a las militares, de conformidad con sus capacidades. Esta función de la Junta Médica Laboral está prevista en el numeral 2 del artículo 15 del Decreto Ley 1796 de 2000, que establece:

“ARTICULO 15. JUNTA MÉDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICÍA. Sus funciones son en primera instancia:

1. Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas.
- 2. Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite.**
3. Determinar la disminución de la capacidad psicofísica.
4. Calificar la enfermedad según sea profesional o común.
5. Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones.
6. Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.
7. Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento”. (Resaltado fuera de texto).

Si bien, el numeral 2 del artículo 15 del Decreto Ley 1796 de 2000, no impone la obligación a la Junta Médica de recomendar la reubicación laboral, sino que es una facultad potestativa, esta función debe ser interpretada y aplicada de conformidad con la protección laboral reforzada que la jurisprudencia ha reconocido a los soldados profesionales afectados por la pérdida de la capacidad de trabajo en servicio activo, siendo éste, el caso del demandante.

(...)

Conforme lo anterior, en el asunto bajo análisis la Junta Médica debió estudiar el conjunto de destrezas y habilidades del actor para recomendar su reubicación laboral, ante la imposibilidad de desempeñar funciones militares, atendiendo la pérdida de la capacidad laboral del 14% del accionante.”³

En suma, para el Juzgado es claro que las autoridades médico- laborales no solo deben determinar si una persona es no apta para la vida militar, **sino que, en caso de no serlo, deben analizar la posibilidad de reubicarla atendiendo a sus habilidades, experticias, formación y aptitudes.** Esa función de tales autoridades encuentra desarrollo legal en el artículo 15.2 del Decreto ley 1796 de 2000, por lo que le corresponde recomendar la reubicación laboral de los evaluados luego de valorada la incapacidad sicofísica y la aptitud para el servicio. Si dichas autoridades no cumplen con ese cometido, la decisión contenida en el acto administrativo objeto de control resulta contraria a derecho, por cuanto omite considerar que el trabajador en condición de discapacidad tiene derecho a que, por lo menos, se analice si debe ser considerado para alguna alternativa de reubicación laboral.

13.3. En armonía con los argumentos normativos y jurisprudenciales, el Juzgado no advierte que las autoridades médico- laborales, prima facie, omitieran el estudio de que el actor fuera reubicado en otro cargo atendiendo a sus habilidades, experticias, formación y aptitudes. Una lectura del Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML22-1-736 de 9 de septiembre de 2022⁴ revela, por lo menos de manera preliminar, lo contrario.

Examinado dicho documento el Juzgado constata que el Tribunal Médico Laboral determinó: (i) que el actor laboraba en la Compañía de Explosivos y Desminado N°. 2 en la ciudad de Buenaventura, lugar en el que iniciaron sus quebrantos de salud;

³ Consejo de Estado – Sección Segunda Subsección “B”. Sentencia de 1° de diciembre de 2016, radicación: 68001-23-31-000-2010-000220-01 (2122-2013) demandante: Yener Acosta Sierra, demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. CP. César Palomino Cortés.

⁴ Prueba documental visible a folio 309 del archivo 01DemandaYAnexos.pdf.

(ii) luego fue enviado al municipio de Puerto Leguizamo con la Compañía de Explosivos y Desminado N° 3 en donde desempeñó funciones de servicio generales durante un año y medio; (iii) por un episodio en el que ingirió un pesticida, fue trasladado a la ciudad de Bogotá en el 2021 a la Caja Promotora de Vivienda Militar para cumplir funciones administrativas; (iv) en esa entidad *“por estrés de atención al usuario se exacerbó ideación suicida y fue remitido al Hospital de la Inmaculada donde lo hospitalizaron durante 15 días, egresa para cumplir incapacidad total de 30 días”*; (v) al momento de la evaluación por parte del Tribunal, el actor presentaba restricción para portar armamento y turnos nocturnos y completaba un año de incapacidad.

Estas premisas revelan que el actor inicialmente prestaba sus servicios como infante de marina en las ciudades de Buenaventura y Puerto Leguizamo, pero debido a sus quebrantos de salud, fue trasladado a la ciudad de Bogotá **para que cumpliera funciones de atención al público**. Ello evidencia, prima facie, que el accionante sí fue objeto de una reubicación laboral para conjurar la crisis de salud que padecía, como también pone en evidencia, además, que por razones de estrés laboral en el nuevo lugar de trabajo en donde fue reubicado, el actor tuvo que ser hospitalizado nuevamente por ideación suicida, al punto que al momento de su evaluación por el Tribunal Médico Laboral llevaba más de un año incapacitado.

Ante estos antecedentes, el Juzgado advierte a folios 312 y 313 del mismo documento, que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía analizó si las capacidades, habilidades y competencias del demandante eran o no compatibles con el desarrollo de actividades de docencia, de instrucción o administrativas al interior de la Armada Nacional y, en consecuencia, si era posible recomendar o no la reubicación en actividades no operativas.

En cuanto a las actividades no operativas como son la de profesor militar, el Tribunal determinó que el actor no cumplía con los requisitos para aspirar a la quinta categoría. En cuanto a labores administrativas, el mismo organismo constató que si bien es cierto el actor aportó certificaciones como tecnólogo en logística manejo de herramientas ofimáticas como Excel, no es menos cierto que completaba un año de incapacidad total por cuenta de episodios de estrés en actividades administrativas que realizaba en la Caja Promotora de Vivienda Militar, que exacerbaron la patología de trastorno de ansiedad generalizada asociado a un trastorno depresivo con antecedente de gestos suicidas, lo que le impide desempeñarse en labores administrativas.

Tampoco era factible, a juicio del Tribunal, que el actor desempeñara actividades propias de un infante de marina como quiera que sus padecimientos ponían en riesgo no solo la integridad, salud y vida del propio interesado sino también la de sus compañeros.

13.4. Un análisis conjunto de los anteriores fundamentos fácticos, normativos y jurisprudenciales que se expusieron con anterioridad, evidencia que la solicitud de suspensión provisional debe ser desestimada en tanto no se advierte fundada, de manera preliminar, en razones de buen derecho. Esta circunstancia impide, adicionalmente, que el Despacho haga un análisis del segundo requisito de toda medida cautelar como lo es el *periculum in mora*, por cuanto será necesario adelantar el proceso correspondiente con miras a dilucidar, en el fallo que ponga fin a la controversia, si las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar.

En razón a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de suspensión provisional del Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML22-1-736 MDNSG-TML-41.1

del 9 de septiembre de 2022, la cual ratificó en su integridad el Acta de Junta Médico Laboral No. 022 del 15 de febrero de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente decisión, ingrese de nuevo el expediente al Despacho, para continuar con el trámite procesal que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b4d85dac3b45efc39af617f5c5db7e43ab7bf44c0b6f2c1898b981620ce76358**

Documento generado en 09/12/2022 12:04:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>